

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL
ARICA

Arica, diez de agosto de dos mil veintiuno.

VISTOS, OÍDOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Individualización del tribunal e intervinientes. Que el día 5 de agosto del año en curso, ante este Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Arica, compuesto por sus jueces titulares doña **FABIOLA ANDREA COLLAO CONTRERAS**, quien presidió la audiencia, don **MARIO ANDRÉS REYES TROMMER** y don **CARLOS GABRIEL ROJAS STAUB**, se dio inicio a la audiencia de juicio oral en la causa **RIT N° 59-2019** y **RUC N° 1800132816-2**, seguida en contra del acusado **MIGUEL JUAN TUPA LOVERA**, cédula nacional de identidad N° 22.676.178-0, nacido en el Valle de Azapa, Arica, el día 26 de diciembre de 1963, de 57 años de edad, de estado civil soltero, agricultor y comerciante, domiciliado en LLuta, Kilómetro 10, Parcela C4, **representado** por el Abogado Defensor Penal Público, don **NICOLÁS ERNESTO FELIPE AREVALO JARA**, con domicilio en calle San Martín número 350 de la ciudad de Arica.

El Ministerio Público estuvo representado por el Fiscal Adjunto don **PATRICIO MANUEL ESPINOZA GONZÁLEZ**, con domicilio en Manuel Rodríguez 363 de la ciudad de Arica.

SEGUNDO: Acusación fiscal. Que el Ministerio Público dedujo acusación en los siguientes términos:

"El día 07 de febrero de 2018, aproximadamente a las 04:10 horas de la madrugada, en circunstancias que la víctima Isaías Josué Orrego Araya, conducía el taxi de turismo placa patente única BCYP-65 por calle Juan Antonio Ríos en dirección al poniente, al llegar a la intersección con avenida Santa María, enfrentó la luz verde del semáforo, continuando su marcha, momentos en que fue colisionado por el taxi básico placa patente única BJVL-43, conducido por el imputado, acompañado de la pasajera Marisol Mendoza Chambía, procediendo el imputado a darse a la fuga del lugar, sin cumplir el deber de detener la marcha, prestar la ayuda posible a las víctimas y dar cuenta a la autoridad del accidente, al cual se encontraba obligado, por cuanto producto de la colisión, la víctima Isaías Josué Orrego Araya resultó con lesiones de carácter leve, consistentes en "dolor a la palpación panilla costal izquierda", según el registro de atención de urgencia respectivo, mientras que la víctima Marisol Mendoza Chambía, resultó con lesiones de carácter leve, consistentes en "policontusa, contusión frontal, en estado de ebriedad", según el registro de atención de urgencia respectivo". (SIC).

En concepto del Ministerio Público, los hechos descritos constituyen el delito consumado de **no detener la marcha, prestar la ayuda posible ni dar cuenta**

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL
ARICA

a la autoridad de accidente de tránsito en que se produzcan lesiones, previsto y sancionado en el artículo 195 en relación al artículo 176, ambos de la Ley Nº18.290 y atribuye al acusado responsabilidad como **autor**.

El persecutor penal no hace referencia a la concurrencia de modificatorias de responsabilidad penal y, previas citas legales, solicita se condene al acusado "a las penas de tres años de presidio menor en su grado medio, multa de diez unidades tributarias mensuales y la inhabilidad perpetua para conducir vehículos de tracción mecánica, por el delito establecido en el artículo 195 inciso 2º en relación al artículo 176 de la Ley 18.290, accesorias legales y costas que sean procedentes" (SIC).

TERCERO: Alegatos de apertura. Que, en su **apertura**, el **Ministerio Público**, hizo referencia, en síntesis, a los hechos de la acusación y que acreditará los mismos mediante la prueba que refiere. Indica que, rendida la prueba, espera generar la convicción en el tribunal para lograr la condena.

La **Defensa** solicitó, **en su apertura y**, en resumen, la absolución puesto que no existen antecedentes para dar por acreditada la responsabilidad de su defendido en el accidente y solamente hay dos versiones, la de víctima y la de su representado y, en ese sentido, cree que la prueba no logrará acreditar quién fue el responsable y quien colisiona a su representado es la víctima. Tampoco se podrán acreditar los elementos del tipo penal puesto que en este accidente su representado actuaba como transportista de una persona que iba en el asiento del copiloto y su defendido prestó toda la colaboración a la víctima que está más afectada y el artículo 195 exige 3 conductas y esos 3 elementos no se podrán acreditar; además su defendido referirá lo que pudo realizar en esta situación de estrés atendiendo a doña Marisol Chambía; la prueba también es insuficiente pues no existe prueba científica que acredite la dinámica del accidente y por eso el tribunal debería absolver a su defendido cuando termine el juicio.

CUARTO: Palabras iniciales del acusado. Que, al inicio del juicio, habiéndosele explicado sus prerrogativas, el acusado **Tupa Lovera** decidió renunciar a su derecho a guardar silencio y, en resumen, expuso que esto fue como 20 para las 4 de la mañana en que recibió una llamada de O'Higgins con General Lagos del bar Bahía, a la cual acudió; le subieron a una pasajera, se dirigió al norte por Santa María y en Juan Antonio Ríos pasa en verde y de repente siente un impacto de un vehículo a su costado derecho en que está el copiloto y el vehículo pierde estabilidad y en el momento del golpe también sintió un shock, no sabía qué hacer cuando se detuvo un poco más adelante, pero sintió llorar a su pasajera quien sangraba y le dijo que le preste ayuda y la única forma de eso fue llevarla al hospital; esta niña le pidió que la ayude que le dolía mucho y se fue al hospital y, cuando llega al hospital, la niña le dice que vuelva al lugar en que la tomó porque

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL
ARICA

de ahí iba a tomar una amiga para que la acompañe al hospital y ahí Carabineros lo detuvo y en ningún momento se quiso dar a la fuga y prestó ayuda a su pasajera que sangraba y se quejaba mucho y volvió al hospital.

Al Fiscal contestó que eran como 20 para las 4 que lo llamaron y después no vio la hora. Este accidente de tránsito ocurre minutos después que lo llamaron. No recuerda la fecha del hecho. Marisol Mendoza Chambía es la pasajera lesionada, ella iba en su vehículo que era un taxi básico y la placa patente es la BJVL43; el accidente ocurrió en Juan Antonio Ríos con Santa María; él iba por Santa María al norte, se acercaba por Santa María a Juan Antonio Ríos en que en el lugar hay un semáforo y señala haber sido chocado en el costado de su vehículo; su vehículo resultó con daños, él trabajaba con el vehículo y el dueño era Iván Félix Tusco Blanco; él (el acusado), era el chofer del vehículo. Responde que, si el vehículo debía ser reparado, eso lo pagaba él (el acusado) porque él era el responsable. Cuando lo chocaron, el vehículo se hizo al lado izquierdo y por más que frenaba, no le respondía; cree que el computador se echó a perder y quedó parado y cuando lo intentó encender nuevamente encendió y volvió a la normalidad; el vehículo que a él lo chocó era otro vehículo de la locomoción colectiva, un taxi, su pasajera estaba lesionada por el accidente; el vehículo que conducía resultó dañado y el otro vehículo también resultó dañado por el accidente; en esos momentos pudo apreciar que, a lo menos una persona estaba dentro de ese vehículo. Él no resultó lesionado y era su pasajera la que sangraba. Cuando pasó, miró de reojo, le hizo una seña en que le indicó que tenía una accidentada que tenía que irse al hospital; estaba a una distancia de casi 4 metros, le vio no más, pero le hizo la seña; aclara que no cruzó palabras con el chofer, simplemente le hizo un gesto y el mismo implicaba que se retiraba del lugar al hospital; se le consulta, ¿cómo podía entender la persona que se iba al hospital? Él levantó la vista, pero nada más, él siguió avanzando y ese fue su error que fue no prestarle ayuda, pero sí le prestó ayuda a su pasajera que sangraba y no sabía qué hacer y se dirigió al hospital. Su pasajera sangraba de la cara, pero no sabe de qué lado. Esto ocurre en Santa María con Juan Antonio Ríos y en el centro lo detienen, en el mismo lugar en que tomó a la pasajera, que es O'Higgins con General Lagos, ahí lo detuvieron. Desde que ocurrió el hecho hasta que lo tomó detenido Carabineros, no fue a una comisaría cercana; no llevó a su pasajera al hospital, su dirección era el hospital, pero la niña le dice que la lleve al lugar de donde la tomó para que una amiga la lleve; responde que no alcanzó a llegar al hospital. Contestando al Fiscal, dice que se fue del accidente para ir al hospital, pero no fue a dicho lugar; dice que sí se preocupó por el otro conductor, pero no hizo nada porque se preocupó por su pasajera.

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL
ARICA

A su Defensa, contestó que, respecto de la velocidad a la que llevaba a la pasajera, era como 40 o 45 y avanzó por Santa María al norte, por la pista del lado derecho, por donde debe irse y, en el semáforo, la luz estaba verde, avanzó a esa velocidad y ahí se produce el accidente; el otro automóvil lo colisionó por la puerta del copiloto y ahí iba doña Marisol; producto del impacto fue impulsado a la izquierda y ahí el auto se le detuvo más adelante; el otro sujeto no se bajó para revisar ni para ver como estaba él ni la pasajera, ni tampoco hizo un ademán de preguntarle cómo estaba él o la pasajera; el otro sujeto no se bajó del auto. Luego estuvo detenido y logró echar andar el automóvil y allí comienza el rumbo y pasó por el costado de él y vio al chofer del otro vehículo, no lo vio sangrar ni inconsciente ni gritando; el otro caballero también lo tiene que haber visto y a doña Marisol no; tampoco le preguntó cómo estaba ella, una vez que logró echar a andar el auto se va al hospital y, cuando va para allá, le dice que se desvíen, la pasajera que recogió en el bar Bahía en O'Higgins con General Lagos; ellos tenían su número y, cuando necesitaban un móvil, lo llamaban y no la llevaba solo a ella sino que a otras personas y en esta ocasión fue a ella; era el chofer frecuente de ese lugar y ya había llevado gente antes de ahí; era una relación de pasajera a chofer y, cuando va de vuelta, le pide ir a buscar a una amiga, que debe haber sido otra trabajadora, para que la acompañe al hospital y Carabineros llegó cuando estaba llamando a una de las amigas para que la acompañe; allí lo fiscalizaron y, en ese momento, doña Marisol estaba sentada en el auto y se quejaba y él le dijo que por favor ayuden a su amiga y llegó carabineros y no pudo hacer nada. Luego, después del accidente, no tuvo contacto con doña Marisol ni siguió trabajando como chofer; respecto del otro caballero, el otro chofer, él lo fue a buscar, él le prestó toda la ayuda posible, él era un chofer de otra empresa y le dijo que tenía que arreglar su auto porque no era de él y arregló su vehículo y le pagó sus días parado y el otro automóvil sufrió los daños en la parte delantera, en el parachoques, el capot y uno de los guardafangos estaban torcidos porque él lo chocó de frente y le reparó todos esos daños materiales y los días que estuvo sin trabajar. Le pagó todo. Respecto de doña Marisol, supo que se fue a su país; ella no era chilena.

Al Tribunal aclara que el motivo de pagar los daños era porque tenía los documentos malos y pensaba que se le podía venir lo peor y había gente que fueron donde ellos y le dijeron que dejó la embarrada y tenía que responder y fueron a su casa.

QUINTO: Convenciones probatorias, querella criminal y demanda civil. Que, no se presentó querella criminal ni demanda civil. Los intervinientes tampoco acordaron convenciones probatorias.

**PODER JUDICIAL
TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL
ARICA**

SEXTO: Prueba del Ministerio Público. Que, con el objeto de acreditar los hechos materia de la acusación, el Ministerio Público rindió la siguiente prueba, que consta íntegramente en el registro de audio:

I.- Testimonial:

1.- ISAÍAS JOSUÉ ORREGO ARAYA, de ocupación conductor, de 32 años de edad.

2.- JORGE ANDRÉ EYZAGUIRRE BARAHONA, de 42 años de edad, de ocupación Sargento Primero de Carabineros de Chile.

3.- CRISTIAN LEONARDO CERDA NAVARRO, de 46 años de edad, de ocupación Suboficial de Carabineros de Chile.

4.- GABRIEL ANDRÉS DUPRAT TORO, de 32 años de edad, de ocupación Cabo Primero de Carabineros de Chile.

II.- Documental:

1.- RAU folio N°905568 de fecha 07 de febrero de 2018, correspondiente a la víctima Mendoza Chambía.

2.- RAU folio N°905564 de fecha 07 de febrero de 2018, correspondiente a la víctima Orrego Araya.

III.- Evidencia material y otros medios de prueba:

Un set de 7 fotografías de los daños ocasionados, sitios del suceso y vehículos involucrados

SÉPTIMO: Prueba de la defensa. Que la defensa se adhirió a toda la prueba del Ministerio Público y no incorporó prueba autónoma.

OCTAVO: Alegatos de clausura y palabras de los acusados. Que la **Fiscalía**, en su **clausura**, señaló, en síntesis, que, una vez rendida la prueba, ésta cumple los parámetros para generar convicción para la condena del acusado refiriendo el desacierto del señor Gabriel Duprat, en orden a invertir los nombres de los choferes que estaban en cada caso en particular y ello es un error e inclusive "los mismos imputados" y víctima se posicionan en un lugar distinto y los señores Eyzaguirre y Cerda dijeron lo mismo y sitúan a las mismas personas que se señalan en la acusación por lo que el referido error no altera de mayor forma la situación. Con la declaración del Sr. Orrego, testigo presencial, los dos funcionarios aprehensores, se pudo reconstruir el hecho y, concordando con la defensa en que podrían haber dos versiones distintas, referida a que ambos pasaron con verde, este juicio no es por un cuasidelito de lesiones en que la causa basal del accidente tenga mayor relevancia típico penal y el delito descrito en el artículo 195 en relación al artículo 176, requiere que el acusado participe en un accidente de tránsito y el Sr. Tupa lo hizo; en segundo lugar, que el sujeto no detenga la marcha del vehículo y el Sr. Tupa no solamente no se detuvo sino que huyó del lugar y,

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL
ARICA

tercero, tampoco presta auxilio a las eventuales víctimas del accidente; así, al Sr. Orrego se le diagnosticaron lesiones leves y, un poco más grave, pero no mayor, la lesión de la Sra. Marisol Mendoza, que también sufrió lesiones leves y afirma que, si la tesis de la defensa dice relación a que el Sr. Tupa, lo que quería hacer era prestar auxilio a su pasajera, esto ocurre en Santa María con Juan Antonio Ríos y debió haber pasado necesariamente por la Primera Comisaría que queda en avenida Santa María 900, cuestión que dice es de público conocimiento y no se detuvo en el lugar ni dio cuenta a Carabineros y, desde ahí, la forma más directa de llegar al Hospital es tomar Vicuña Mackenna y no lo hace y es detenido dirigiéndose en sentido contrario al hospital y él no tenía intención de prestarle ayuda a su pasajera sino que de huir del lugar, por ello estima que se configura el ilícito por el que se dedujo acusación; los daños de los vehículos se acreditaron con las fotografías y la declaración de los policías ya señalados. Estima que debe dictarse resolución de condena por la participación del acusado en calidad de autor del delito que se encuentra consumado.

La defensa refirió, en su **clausura**, en resumen, que reitera su solicitud de absolución pues cree que no se dan los elementos del tipo penal, sin perjuicio de otras situaciones. Estima que no está acreditado el sujeto activo para cometer el delito, que, conforme a la norma de la Ley N° 18.290 y al mensaje presidencial de la Ley Emilia, elemento histórico, sistemático y lógico, se ha determinado por la jurisprudencia, que el sujeto activo de este delito es el conductor responsable del accidente y, en ese sentido, cita un fallo de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, ROL 3582-2015, donde se recoge esta tesis y también señala que existe un fallo de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción, ROL 76-2016, donde se señala que el sujeto activo, necesariamente, debe tener participación responsable en el delito base, citando el referido fallo en una parte del mismo y reitera que, el razonamiento jurídico, es que el sujeto activo debe ser responsable del delito base y, en este caso, este elemento del tipo no se logra acreditar pues no se probó que el acusado haya sido el responsable del delito y sí se pudo determinar que la víctima, en su relato, carece de respaldo en relación a la versión de los propios policías y la misma víctima señala que no se quedó en el lugar, que él no llama a Carabineros y se dirige solo a la posta, cuestión que fue controvertida por el señor Cristian Cerda, suboficial y quien indicó que le tomó relato a la víctima en el sitio del suceso y cree que hay una discordancia y ello afecta a la credibilidad del relato de la supuesta víctima y, por lo tanto, esto también se corrobora con la declaración de su representado que estima que es más concordante con la prueba material que la versión de la víctima puesto que esta última es quien choca y colisiona el automóvil de su defendido por el lado del copiloto y queda por

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL
ARICA

determinar si cruzaron o no con luz verde y eso no se pudo comprobar y, por tanto, hay más que duda razonable y es un elemento que no tiene sustento material en la prueba y, por lo tanto, el sujeto activo no se encuentra debidamente acreditado. En cuanto al fondo del asunto y los elementos típicos respecto del hecho, también la jurisprudencia habría sido conteste en señalar que aquí deben concurrir los 3 elementos, es decir, no detener la marcha, no prestar la ayuda y no dar aviso a la autoridad que tienen que darse copulativamente y, en este caso, cita jurisprudencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Arica en fallo 272-2015 donde el razonamiento jurídico de la interpretación de dicha norma dice relación con que se deben dar los 3 elementos copulativamente y si se cumple uno de éstos, por ejemplo, si presta ayuda o si llama a Carabineros o si se queda en el lugar, no existiría delito y en dicho fallo se entregan las razones doctrinarias de por qué la referida Ilustrísima Corte entiende aquello; también, existe otro fallo, el 37-2016, pero éste es de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de La Serena, donde se señala que la tipicidad del delito en comento, necesariamente está compuesta por la falta de ejecución de los 3 verbos rectores de manera conjunta, de modo que no puede entenderse que éste se configura si solamente no se da cumplimiento a algunas de estas acciones; en este caso, cree que don Miguel Tupa Lovera sí prestó ayuda porque tenemos que tener en cuenta que víctimas son dos y hay una que es de mayor gravedad, una persona, una mujer, pasajera de su defendido, respecto de quien éste tiene responsabilidad como chofer y ella terminó policontusa y fue la víctima directa del choque, es decir, el automóvil lo chocó a su costado y dicha víctima terminó con lesiones, con su cara sangrando, corroborado aquello por ambos testigos, objetivos, Carabineros y, en ese sentido, Miguel Tupa Lovera, un señor Aimara, quien se encontraba realizando labores de chofer con una mujer en un local en donde él era ya habitual, sentía una especial responsabilidad respecto de ella y al verla en una situación, después de haber sido colisionado, con el estrés, con el shock que conlleva esto, la única solución, coherente, lógica y responsable que él ve en el momento, es tratar de prestar ayuda a la víctima, que era su pasajera y el mismo don Miguel Tupa dijo que vio al otro sujeto, que su auto estuvo detenido y que el otro sujeto no presentaba ninguna lesión y de hecho, eso se corrobora en la propia prueba documental, donde se señala que Isaías Orrego, presenta un dolor a la palpación y ni siquiera se pudo corroborar esto, por ejemplo una escoriación, un eritema, algo que sea objetivo a la palpación y eso es algo subjetivo que no se pudo corroborar ni siquiera con un elemento objetivo que se haya manifestado en el cuerpo de la víctima que es contrario de lo que ocurre con doña "Marisol Chambía"; por lo anterior, no se cumple el elemento de no socorrer, toda vez que sí prestó socorro a su propia pasajera, da el contexto de cómo él

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL
ARICA

brinda este socorro, como la toma, como la traslada hacia el hospital y, en ese contexto se corrobora lo indicado por don Cristian Cerda quien indica que don Miguel Tupa, cuando lo fiscalizan, recién se había detenido en el bar de la víctima, donde la recoge en primer lugar y, en segundo lugar, para buscar a una amiga de la propia víctima para acompañarla al hospital y allí es detenido y, en ese sentido, cree que la prueba no es suficiente para condenar a don Miguel Tupa, cree que en este caso podría ser una situación inversa, tal como lo dijo don Cristian Cerda, que tenían versiones contrapuestas y esto no tiene corroboración en ningún elemento objetivo y, por lo tanto, se debe absolver a don Miguel Tupa.

No hubo réplicas.

Previo a declarar cerrado el debate, **se concedió la palabra al acusado** para que exponga lo que estime pertinente, sin embargo, guardó silencio.

NOVENO: Hechos probados. Que analizada la prueba en la forma dispuesta por el artículo 297 del Código Procesal Penal, es posible concluir, los siguientes hechos:

El día 07 de febrero de 2018, aproximadamente a las 04:10 horas de la madrugada, en circunstancias que Isaías Josué Orrego Araya, conducía el taxi de turismo placa patente única BCYP-65 por la ciudad de Arica, por calle Juan Antonio Ríos en dirección al poniente, al llegar a la intersección con Avenida Santa María, enfrentó el semáforo, continuando su marcha, momentos en que se produjo una colisión con el taxi básico, placa patente única BJVL-43, conducido por Miguel Juan Tupa Lovera, acompañado de la pasajera Marisol Mendoza Chambía, procediendo Tupa Lovera a retirarse del lugar, sin cumplir el deber de detener la marcha, prestar la ayuda posible a los afectados y dar cuenta a la autoridad del accidente en que, producto de la colisión, Isaías Josué Orrego Araya, resultó con lesiones de carácter leve, consistentes en dolor a la palpación parrilla costal, mientras que Marisol Mendoza Chambía, resultó con lesiones de carácter leve, consistentes en policontusa, contusión frontal.

DÉCIMO: Valoración de la prueba. Que para establecer el hecho precedentemente referido, se cuenta, en primer término, con lo que expuso al respecto **Isaías Josué Orrego Araya** quien, en lo pertinente y en síntesis, expuso que es chofer de taxis y se dedica a ello hace más o menos como 3 años antes de estar privado de libertad y ahora lleva 10 meses privado de libertad; el año 2018 ya era chofer de taxi, se dedicaba a eso; afirma que, respecto del vehículo que conducía, no recuerda la placa patente; en su carrera como chofer de taxi, vino por un choque, una colisión del 2018 por Juan Antonio Ríos, en que participó el señor que está presente, el de mascarilla negra (el acusado era la única persona de

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL
ARICA

maskarilla negra durante el juicio); eran aproximadamente entre las 04:20 a 4:30 y le salió una carrera e iba por Juan Antonio Ríos al oeste, como a la playa y ahí fue cuando colisionó con el otro taxi; indica que iba en luz verde en dirección a la playa y ahí el otro taxi se pasó la luz roja, luego colisionaron, quedó en dirección mirando a la playa en dirección al sur; hizo como un trompo el taxi y el caballero se dio a la fuga y otros colegas taxistas vieron que este taxista se arrancó y lo empezaron a seguir hasta que dieron con Carabineros y lo detuvieron; otro colega de taxi lo llevó al hospital y eso fue lo que pasó y llegó el caballero al hospital y no sabe qué habrá hecho; a él (al testigo) le devolvieron su licencia de conducir y lo derivaron a la casa y no quedó citado a tribunales. Aclara que, cuando iba por Juan Antonio Ríos, al llegar a Santa María, enfrentó el semáforo el cual, para él, estaba en verde y, para el otro vehículo, estaba en rojo. Indica que su vehículo tuvo daños, el capot, parabrisas, parachoques; daños al motor no tuvo, solo la carrocería del vehículo. Al lugar del accidente no sabe si llegó Carabineros pues él avisó a la central del accidente y la operadora llamó al dueño del taxi y lo llevaron al hospital los mismos colegas. Esos daños del vehículo fueron reparados totalmente y fue por el caballero acá presente, él transó con el dueño del auto y el vehículo siguió en condiciones operativas para trabajar.

Al testigo se le exhibe el ítem evidencia material y otros medios de prueba número 1 consignado en el Auto de apertura de Juicio Oral y los refiere en los términos que se indican, en la secuencia seguida por el Fiscal:

Fotografía 3: *placa del vehículo que manejaba él, es la BCYP65.*

Fotografía 2: *es la parte del vehículo, está el parachoques, el capot, se ve dañado el radiador, pero más allá del motor no pasó; es la parte delantera del vehículo:*

Fotografía 4: *es la fotografía del taxi con el que colisionaron, la placa patente es BJVL-43.*

Fotografía 1: *es la esquina donde fue la colisión, la señalética indica Juan Antonio Ríos con Avenida Santa María.*

Se le consulta por el Fiscal: ¿Se percató si el chofer tenía o no una pasajera o pasajero?, dice que sí, que iba con una pasajera. Se le consulta, ¿cruzó palabras con el chofer del otro vehículo o le hizo algún tipo de gesto? Él solamente paró metros más adelante y luego siguió; paró sí, pero después siguió. Posteriormente a la defensa y, sin perjuicio de las otras afirmaciones que realizó a dicho interviniente y que serán objeto de diversas consideraciones, afirmó que producto del choque y el golpe, quedó con un dolor de cabeza, pero nada más comprometedor y no resultó con nada grave.

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL
ARICA

Estos dichos de quien es presentado como una de las víctimas por parte del persecutor penal son consistentes con aquellos otorgados en la declaración policial que prestó Isaías Orrego ante el Sargento Primero de Carabineros **Jorge Eyzaguirre Barahona**, quien recibió de la fiscalía de Arica una instrucción particular y, en virtud de ella y dentro de otras diligencias, tomó declaración a Isaías Orrego, *quien expuso que el día 7 de febrero de 2018, cerca de las 4:10 de la mañana, conducía su vehículo, taxi de turismo, por la avenida Juan Antonio Ríos en dirección al poniente y, al llegar a la Avenida Santa María, enfrentando la luz verde del semáforo, cruza la citada calle y, por su costado izquierdo, es decir, por la Avenida Santa María en dirección al norte, aparece un taxi básico, el cual no respeta la luz roja del semáforo, siendo colisionado por la víctima, quien queda en el lugar en su vehículo; el automóvil que lo choca que era conducido por Miguel Tupa Lovera, quien se da a la fuga por Santa María en dirección a Diego Portales, ingresando por la parte trasera del terminal de buses; en ese intertanto, la víctima, vía radial, avisa a sus colegas taxistas y uno de ellos sigue al vehículo causante de los daños hasta que es interceptado por Carabineros en O'Higgins con Blanco Encalada donde Carabineros procede a la detención. Eso declaró la víctima y señala que los daños que se le causó al vehículo habían sido cancelados, pero por el propietario del vehículo que conducía Tupa Lovera y, en relación a los daños, no quería seguir con la denuncia.*

De lo referido previamente, el relato otorgado por Isaías Orrego durante el juicio y aquel que brindó durante la investigación al funcionario policial Jorge Eyzaguirre, fue concordante en la fecha de los sucesos, la hora aproximada, la intersección en donde se produjo la colisión y la circunstancia de que el acusado se retiró del lugar sin prestarle ayuda; también pudimos observar y confirmar tanto el lugar de la colisión como las consecuencias de la misma y el detalle de los vehículos involucrados a través de la exhibición de las imágenes que explicó Isaías Orrego Araya, particularmente la imagen 1 en que se observa la señalética relativa a la intersección donde ocurrieron los sucesos; fotografías 2 y 3 que dan cuenta del vehículo que conducía Orrego Araya, en que se aprecian los daños y su placa patente, respectivamente y, finalmente, la fotografía 4 en que observamos el vehículo conducido por el acusado en que se aprecia la placa patente de dicho automóvil;

En síntesis, el relato de Isaías Orrego, sumado a las imágenes que éste explicó junto al testimonio del policía Jorge Eyzaguirre quien refirió lo que indicó durante la investigación Orrego Araya nos han aportado a la convicción sobre la fecha de los hechos, la hora, la existencia de una colisión, los vehículos involucrados, la reacción del acusado y las consecuencias del referido choque.

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL
ARICA

Por otra parte, se contó también con el testimonio del funcionario policial **Cristian Cerda Navarro**, quien asistió al procedimiento policial que originaron los hechos de la presente causa y es así como expuso que *el procedimiento se gestó en el año 2018, el 7 de febrero, aproximadamente a las 04:10 en que hubo una colisión de un taxi básico y un taxi de turismo; efectuaban un patrullaje en la fecha y hora indicada en Juan Antonio Ríos con Santa María y se les acerca un ciudadano, el conductor de un taxi de turismo, Isaías Orrego Araya; afirma que no recuerda la patente del vehículo, pero la persona les indicó que fue colisionado por otro conductor de un vehículo taxi básico, quien más tarde fue identificado como Miguel Tupa Lovera, luego de haber tomado conocimiento de eso, de lo que les señaló el conductor, efectuaron un patrullaje, toda vez que, de la dinámica ocurrida, se entiende que no prestó auxilio a la víctima por el procedimiento propiamente tal y en dicho contexto pudieron identificar al vehículo que estaba en Bernardo O'Higgins con General Lagos, momentos en que encontraron el vehículo y estaba el Sr. Tupa y una mujer en el asiento del copiloto quien estaba con lesiones, las cuales no recuerda. Posteriormente, se le hizo alcoholemia a ambos, la cual arrojó 0.0 gramos de alcohol por litro y la pasajera se encontraba lesionada y en estado etílico, por lo diagnosticado por el facultativo del nosocomio local; se acuerda que tomaron contacto con el Fiscal y les instruyeron que pasara a control de detención el señor Tupa. Pudo verificar las condiciones en que se encontraba el vehículo que conducía el Sr. Tupa, el cual tenía abolladuras producto de la colisión. Responde que, al Sr. Tupa, no se le tomó declaración, encontrándose en calidad de imputado, pero sí manifestó la narración contraria de lo que señalaba don Isaías, diciendo que éste era el responsable e Isaías decía que don Miguel era el responsable. Reitera que la pasajera tenía lesiones, cree que sangraba en la cabeza y ella no fue clara con sus dichos pues estaba en estado etílico, pero sí decía que iba de copiloto en el vehículo. Se le consulta, el imputado y la testigo, ¿en qué fueron al hospital?, responde que ellos derivaron a la ciudadana pues era víctima de cierta manera y el imputado también, fueron trasladados por ellos.*

Además de lo anterior, también se contó con lo expuesto por el otro policía que participó en el procedimiento policial, a saber, **Gabriel Andrés Duprat Toro**, quien expuso, en lo pertinente, que *el día 7 de febrero de 2018 a las 4:10 de la mañana, CENCO los envía a verificar un procedimiento a calle Santa María con Juan Antonio Ríos por un accidente de tránsito; en el lugar se entrevistaron con la víctima Miguel Tupa Lovera, quien dice que, al llegar al semáforo, le dio luz verde y, al continuar su camino, fue impactado por otro vehículo que se dio a la fuga; efectuaron un patrullaje y en O'Higgins con Lagos, se percataron del vehículo y lo fiscalizaron y el conductor era Isaías Orrego Araya, que manifestó que había*

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL
ARICA

colisionado a un vehículo, no aportó ningún otro antecedente y lo detuvieron porque la víctima les dio la patente del vehículo. El chofer que estaba en calle Lagos con O'Higgins estaba con una persona de sexo femenino en estado de ebriedad; esta mujer mantenía lesiones, el vehículo que tenía el chofer, en General Lagos con O'Higgins, al momento de la fiscalización, se encontraba con signos de haber participado en un accidente de tránsito. Responde que se le tomó fotografías al vehículo y, en dicho contexto se le exhibe la ya referida evidencia material y otros medios de prueba singularizada en el auto de apertura de juicio oral con el numeral 1 y las describe como se pasa a señalar, según el orden seguido por el Fiscal:

Fotografía 4: *se ve el taxi colectivo que, al efectuar el patrullaje, lo interceptaron en calle Lagos con O'Higgins; en la parte inferior se lee BJVL43, esa es la patente del vehículo.*

Fotografía 5: *se ve que, a raíz de la colisión, la puerta se encuentra con daños, es el mismo vehículo, corresponde a la patente que otorgó la víctima.*

Fotografía 6: *daños del frontal del vehículo*

Fotografía 7: *es el vehículo que el imputado manejaba y son los daños de la puerta; dentro del vehículo se ve una mujer.*

Fotografía 3: *patente del colectivo que manejaba la víctima. La patente es BCYP65;*

De las personas que estaban al interior del vehículo, no recuerda si fueron trasladadas al centro asistencial. Al ser un procedimiento de accidente de tránsito se debe llevar sí o sí a hacer alcoholemia y se tiene que llevar el procedimiento a la posta local, pero en realidad no recuerda. Responde que el chofer de General Lagos con O'Higgins no prestó declaración.

Así las cosas, de los testimonios de ambos policías, debe referirse inmediatamente el error en que incurrió el funcionario Duprat Toro quien invierte el nombre de la persona vinculada al vehículo placa patente BCYP65 y que se encontraba en la intersección de Avenida Santa María con Juan Antonio Ríos y con la persona que se encontraba al volante del vehículo placa patente BJVL43, el cual se encontró en el sector de General Lagos con O'Higgins; Gabriel Duprat refiere que el primero era Miguel Tupa Lovera y, el segundo, era Isaías Orrego, en circunstancias que la propia versión del acusado, el atestado de Isaías Orrego, mantenido al policía Jorge Eyzaguirre y lo observado por el también funcionario de Carabineros, Cristian Cerda Navarro, dan cuenta que quien era el conductor del vehículo que estaba en la intersección de Avenida Santa María con Juan Antonio Ríos era Isaías Orrego y que quien se encontraba en el vehículo ubicado en calle O'Higgins de Arica, era el acusado Tupa Lovera; de lo anterior, asumimos estos jueces que esa contradicción se debe únicamente a una confusión del testigo desde

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL
ARICA

que, además, señala correctamente las placas patentes asociadas a los vehículos encontrados en los dos lugares referidos y que era el vehículo con la patente BJVL43 el que mantenía dos ocupantes, incluida una persona de sexo femenino lesionada. Aclarado lo anterior, la dinámica relatada por los policías viene en refrendar las circunstancias relativas al lugar de los hechos, el día de los mismos y el horario; también da cuenta de los vehículos involucrados en el accidente de tránsito, uno de ellos, aquel cuya placa patente es la BJVL43, conducido por Miguel Tupa Lovera, no estaba en el lugar del accidente. Ahora bien, si bien es cierto que entre los policías que participaron en el procedimiento policial y lo indicado por Isaías Orrego Araya existe una contradicción, dada porque los funcionarios Cerda Navarro y Duprat Toro, indicaron que al llegar a la intersección de Avenida Santa María con Juan Antonio Ríos, se encontraba uno de los conductores, esto es, Isaías Orrego Araya (ya nos hicimos cargo de que Gabriel Duprat se confundió y mencionó que el conductor de ese vehículo era el acusado Tupa Lovera, pero sí dijo que estaba el conductor del vehículo placa patente BCYP65 el cual, por lo ya expuesto, sabemos que era Isaías Orrego Araya) quien les narró los hechos y, por otra parte, Isaías Orrego dijo, a una aclaratoria del Tribunal que, *cuando llegó al hospital, Carabineros le preguntó por qué estaba ahí, respondió que por el accidente y ellos le dijeron que ya habían llegado otras dos personas por eso, un caballero y una mujer*. En dicho escenario, la contradicción se resume a si la entrevista de Isaías Orrego con los policías que declararon en el juicio fue en la misma intersección de Avenida Santa María con Juan Antonio Ríos o en el Hospital Regional de Arica; dicha cuestión no parece relevante desde que, en lo medular, ambos policías dieron cuenta de la dinámica de los hechos por lo que observaron, es decir, vehículos que individualizaron y dos conductores que reconocieron haber sido afectados por una colisión entre ambos en dicho lugar; uno de los vehículos estaba en el lugar y, el otro se retiró; si la versión de la víctima se prestó en el hospital o en el lugar de los hechos, en el contexto descrito, en nada afecta los antecedentes objetivos que sí pudieron observar ambos policías, uno de los cuales, a saber Gabriel Duprat, ante su confusión, sí pudo responder adecuadamente la individualización de los vehículos involucrados en el contexto de la explicación y descripción de las imágenes que le fueron exhibidas; a todo lo anterior, hay que agregar que, en definitiva, fecha, lugar, hora, la existencia de una colisión, vehículos involucrados, conductores y que uno de los vehículos se mantuvo en el lugar y el otro se retiró, es algo que el propio acusado reconoce en su declaración inicial en el juicio y que ni siquiera es contraria a la tesis sostenida por la defensa, quien apunta más bien a su solicitud de absolución por la falta de concurrencia de elementos normativos del tipo penal.

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL
ARICA

Por otra parte, se incorporó también por el persecutor penal el **Registro de Atención de Urgencia (en adelante RAU), folio 905568 de fecha 07 de febrero de 2018**, correspondiente a Marisol Mendoza Chambía en que, dentro de lo que se logra leer, indica en estado de ebriedad, policontusa, contusión frontal y pronóstico "leve"; también se incorporó el **RAU folio 905564 de fecha 07 de febrero de 2018**, correspondiente a Isaías Josué Orrego Araya en el cual, dentro de lo que se puede leer, refiere dolor a la palpación de parrilla costal con pronóstico leve; estos documentos nos confirman las lesiones sufridas por ambas personas en el accidente que origina el presente juicio.

Finalmente, que los hechos ocurrieron en la ciudad de Arica, se concluyó desde que el señalamiento de las calles efectuadas por el acusado y varios de los testigos del Ministerio Público dan cuenta que las mismas se ubican en la ciudad de Arica por constituir aquello un hecho público y notorio para quienes habitamos en esta ciudad. Asimismo, también se concluye de ambos RAU incorporados durante el juicio y en que se menciona al Servicio de Salud Arica, Hospital "Dr. Juan Noé Crevani", el cual, también es un hecho público y notorio para los habitantes de esta Región, que se ubica en la Capital Regional, es decir, Arica.

UNDÉCIMO: Calificación jurídica y grado de desarrollo. Que los hechos establecidos en la presente sentencia configuran el delito de no detener la marcha, prestar la ayuda posible ni dar cuenta a la autoridad de accidente de tránsito en que se produzcan lesiones, previsto y sancionado en el artículo 195 inciso segundo en relación al artículo 176, ambos del D.F.L. 1, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Tránsito N° 18.290, desde que se acreditó que una persona que participó en un accidente de tránsito en el cual se produjeron lesiones, no realizó ninguna de las tres acciones indicadas previamente que componen la obligación contenida en el artículo 176 ya citado; sobre este punto, toca hacernos cargo de los dos principales reparos de orden jurídico que plantea la defensa en orden a que no se reunirían los requisitos del tipo penal por el cual se acusó a **Miguel Juan Tupa Lovera**; argumentos que ya fueron expuestos, pero que para efectos de abordarlos se agrupan como se indica:

a.- No está acreditado el sujeto activo para cometer el delito, que, conforme a la norma de la Ley N° 18.290 y al mensaje presidencial de la Ley Emilia, elemento histórico, sistemático y lógico, se ha determinado por la jurisprudencia, que el sujeto activo de este delito es el conductor responsable del accidente.

Sobre esta solicitud, consideramos estos jueces que no se funda ni en el elemento gramatical del texto legal que impone la obligación en comento ni en un supuesto criterio jurisprudencial uniforme; en efecto, el artículo 176 de la Ley de

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL
ARICA

Tránsito no hace ninguna distinción, como lo pretende la defensa, en el sentido de que el conductor compelido por la obligación establecida en la norma citada, sea el causante del accidente de tránsito desde que se impone dicha carga en términos amplios al conductor que participe en los hechos; es decir, el legislador incluso se pone en el lugar de que el conductor no hubiere producido el accidente pues de ser así, hubiera quedado plasmado en el texto legal y así no ocurrió. Lo anterior debe engarzarse con que no obstante haber realizado la defensa dos citas jurisprudenciales para respaldar su solicitud de absolución por este motivo, particularmente fallos de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago y de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción, dichas decisiones distan de dar cuenta de un criterio uniforme desde que inclusive, el máximo Tribunal del país, la Excelentísima Corte Suprema, en sentencia de fecha 5 de noviembre de 2018, en autos ROL 6095-17, es decir un fallo posterior y emitido por un tribunal superior a los citados por la defensa, resolvió en sentido contrario desde que en su considerando Quinto, indicó que ***“Así las cosas, el ya mencionado artículo 176 impone al conductor una obligación de solidaridad, generándole un deber de garante cuyo incumplimiento trae aparejada una sanción penal. En consecuencia, lo único que exige la norma para que surja la obligación legal de detenerse, prestar auxilio y dar aviso a la autoridad, es que el conductor participe en un accidente de tránsito que genere los resultados previstos en la disposición legal. Por ello, aun cuando un accidente de tránsito no se deba a culpa de un conductor, subsiste su deber de detenerse, prestar colaboración y dar cuenta a la autoridad, en los términos ya explicitados, indistintamente de si tiene o no responsabilidad de la lesión sufrida por el tercero.*”**

En síntesis, el tipo penal del artículo 195 de la Ley 18.290, es un delito doloso de omisión, cuya conducta ilícita deriva del actuar voluntario del sujeto que, no obstante que conoce la existencia de un accidente en el que participó y por el cual se produjeron resultados lesivos o mortales, decide incumplir deberes establecidos por el legislador como garante” (la negrilla y cursiva es del Tribunal).

De lo anterior, resulta irrelevante saber si el acusado en la presente causa fue o no el causante del accidente que origina este litigio y, por ello, no es necesaria alguna pericia para determinar aquello, desde que se ha acreditado que el acusado tomó parte en un accidente en que supo que en el mismo se produjeron lesiones, tanto en su acompañante y pasajera, como en el conductor del otro vehículo involucrado en los hechos; esto último se concluye desde que, no obstante el acusado decir que no vio lesionado al conductor del otro vehículo, de las

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL
ARICA

imágenes incorporadas durante el juicio, especialmente las números 2 y 6, se aprecia que la magnitud del accidente causó tal nivel de daños, especialmente en el vehículo placa patente BCYP-65, que era altísimamente probable que se hubiere producido una lesión en algún ocupante de dicho vehículo aunque ellas no se observaren a simple vista; por cierto, no puede exigirse un conocimiento de dicha situación al nivel de certeza de un comprobante médico, cuestión que haría inaplicable la norma y, en la especie, la magnitud del accidente, revelada por los daños en ambos vehículos, especialmente aquel conducido por Isaías Orrego Araya, hacían, para un individuo medio colocado en esa situación, esperable que hubiere resultado dicha persona también con lesiones, cuestión que, por lo demás perfectamente se hubiere aclarado si el acusado se hubiere detenido y decidido prestar la colaboración que exige el citado artículo 176 de la Ley de Tránsito.

Asimismo, aunque no fue una afirmación que de manera expresa realizara la defensa, durante diversos pasajes del juicio realizó preguntas en orden a que quien se presenta como víctima, esto es, Isaías Orrego Araya, tampoco habría cumplido con la obligación referida en el artículo 176 indicado, desde que no se acercó al vehículo conducido por Miguel Tupa Lovera ni ayudó a ninguna de esas personas; sobre ello, debe indicarse que Isaías Orrego, contestó a la defensa que había quedado atrapado con el volante; asimismo, es un hecho reconocido por el acusado que, después que se le detiene el vehículo por el impacto, lo logra hacer partir y se va del lugar, por lo que tampoco hubiera sido posible prestarle ayuda a dicha persona por Isaías Orrego desde que el acusado y su acompañante, a los pocos instantes de ocurrido el accidente, ya no estaban en el lugar; finalmente, inclusive en el escenario hipotético de que también Isaías Orrego Araya hubiere incumplido la obligación contenida en el referido artículo 176 de la Ley de Tránsito, quien es el acusado en este juicio no es él sino que Miguel Tupa Lovera y respecto de él se debe verificar la concurrencia de los elementos del tipo penal y el eventual e hipotético incumplimiento de Isaías Orrego no actúa como una pseudo causal de justificación.

Por lo anterior, se rechaza la afirmación de que correspondería la absolución por una carencia de determinación de un sujeto activo.

b) La jurisprudencia habría sido conteste en señalar que aquí deben concurrir los 3 elementos, es decir, no detener la marcha, no prestar la ayuda y no dar aviso a la autoridad que tienen que darse copulativamente y, en este caso, cita jurisprudencia, de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Arica y de La Serena, en que la interpretación de la norma dice relación con que se deben dar los 3 elementos copulativamente y si se cumple uno de éstos, por ejemplo, si presta ayuda o si llama a Carabineros o si se queda en el lugar, no

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL
ARICA

existiría delito y afirma que don Miguel Tupa Lovera sí prestó ayuda, particularmente a la pasajera que llevaba que se encontraba de mayor gravedad y, por lo tanto, no se cumple el elemento de no socorrer; sobre esta afirmación, debe indicarse, en primer término, que no existe antecedente alguno que indique que el acusado hubiere siquiera prestado ayuda a la pasajera que iba con él, tanto así, que el policía que lo controló en la calle Bernardo O'Higgins, esto es, Cristian Cerda, señaló que a Tupa Lovera no se le tomó declaración y éste sí dijo que el responsable del choque era el otro conductor; en efecto, este mismo policía y tal como lo indica la defensa, recordó que la pasajera estaba lesionada, sangraba, pero el acusado no dijo a la policía que llevara a dicha persona al hospital o que estuvieren esperando a una tercera persona; es cierto, el acusado tiene derecho a guardar silencio, sin perjuicio de lo cual, presentó una teoría del caso alternativa y no es de cargo de persecutor penal acreditar esa versión y, de la prueba rendida, no hay ningún elemento que se aproxime al hecho que el acusado se encontraba ayudando o siquiera aprestando a colaborar con su lesionada pasajera; por su parte, es inconsistente al propio escenario planteado por la defensa el hecho que el acusado se retiró del lugar al ver sangrar a su pasajera y que por ser ésta su prioridad, decidió llevarla al Hospital, dado que no tiene lógica alguna que, posterior al accidente, el acusado supuestamente se dirigió al hospital y cerca de allí, por un requerimiento de Marisol Mendoza, se volvieron al lugar desde donde la recibió como pasajera a buscar a una tercera persona, dado que si era de tal gravedad lo que observó en su pasajera, con sangrado en la cabeza, en que no se preocupó de llamar a la autoridad ni de socorrer al otro conductor, decide hacer caso a esa persona que sangra en la cabeza y se encuentra ebria antes que llevarla a un centro hospitalario; no olvidemos que el propio acusado reconoció que era un chofer frecuente del lugar desde donde el cual tomó como pasajera a su acompañante y perfectamente la pudo llevar al hospital y llamar a ese lugar o dejarla en el centro asistencial y luego ir a buscar a alguien del Bar Bahía; el sentido común indica que si el acusado tuvo tiempo para desviar su ruta, postergando la llegada al hospital, estimó que la situación que enfrentaba, en concreto, no era de mayor gravedad y, en consecuencia, perfectamente pudo tomarse un instante para verificar la situación del otro conductor afectado y, en algún punto del viaje, dar cuenta a la autoridad del accidente. Se podrá indicar que lo referido previamente es una mera especulación, sin embargo, la prueba objetiva, dada por la versión de ambos policías que participaron en la detención del acusado, no da cuenta que, previo a su control policial, Tupa Lovera se hubiere dirigido hacia el Hospital y cambiado de ruta o se hubiere aprestado a ir a dicho centro asistencial; en ese escenario, los dichos del acusado no se respaldaron en

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL
ARICA

antecedente alguno y, analizando el escenario hipotético de la versión que plantea, tampoco se ajusta a un mínimo de sentido común.

En consecuencia, ninguna de las conductas que conforman la obligación que se establece en el artículo 176 de la Ley de Tránsito y cuya omisión se encuentra penada en el artículo 195 de dicha Ley, se cumplió y, en consecuencia, el tipo penal se ha satisfecho a cabalidad.

Sin perjuicio de lo anterior, debe indicarse que inclusive en el escenario hipotético planteado por la Defensa Penal Pública, no ha sido objeto de controversia alguna que el acusado no cumplió con su obligación de detener su marcha y dar cuenta a la autoridad policial; en el caso de la detención, si bien el vehículo del acusado se detuvo, ello fue debido a la colisión y respondió a su defensa que *producto del impacto fue impulsado a la izquierda y ahí el auto se le detuvo más adelante*; también agregó que *estuvo detenido y luego logró echar andar el automóvil y comienza el rumbo*. Es decir, según sus propios dichos, su intención nunca fue detenerse y de hecho no lo hizo, el automóvil se le detuvo y a penas lo pudo hacer andar, emprendió la marcha; cuestión que es similar a lo que dijo Isaías Orrego que vio que el otro vehículo paró metros más adelante y luego siguió; de manera que, en la práctica, el acusado únicamente estuvo detenido el mínimo tiempo necesario para hacer funcionar su vehículo e irse del lugar no cumpliendo así la primera obligación que le imponía el artículo 176 de la Ley de Tránsito pues no detuvo su marcha sino que, ésta se interrumpió por el accidente y, a penas pudo, se fue. Respecto de no dar cuenta a la autoridad es una cuestión que no se cumplió inclusive siguiendo los dichos que indicó el acusado al inicio del juicio así como la postura de su defensa en el desarrollo del mismo; lo anterior guarda relevancia pues la obligación contenida en el artículo 176 de la Ley de Tránsito es una sola, compuesta de tres elementos, esto es, detener la marcha, prestar la ayuda que fuese posible y dar cuenta a la autoridad policial más inmediata; es decir, de texto legal expreso, si no se cumple una de esas tres conductas, no se ha cumplido la obligación que impone el legislador; este tratamiento va en la línea de la descripción del tipo penal contenida en el artículo 195 inciso 2º de la referida Ley al indicarse que lo que se sanciona es el incumplimiento “de la obligación de detener la marcha, prestar la ayuda posible y dar cuenta a la autoridad de todo accidente en que se produzcan lesiones, señalada en el artículo 176”; se reitera, en consecuencia que la obligación es una y cuyo cumplimiento implica el despliegue de tres conductas y, por lo tanto, necesario resulta concluir que si una de esas conductas no se despliega, la obligación no se cumple. A este respecto y no obstante los dos fallos citados por la defensa, la Excelentísima Corte Suprema, en el mismo fallo al que se ha hecho referencia previamente, esto es, en los autos ROL

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL
ARICA

6095-17, ha sostenido en su considerando Duodécimo, “**[...]el artículo 195 inciso 2° de la Ley N°18.290, no le impone al conductor una o dos, sino que tres exigencias copulativas, esto es, todas ellas deben concurrir, por lo que basta que una sola de ellas no sea cumplida para que se configure tal ilícito. Así, los dos primeros deberes, aparecen satisfechos por el encartado. Sin embargo, según se explicitó en el fallo recurrido y que se analizó precedentemente, no es posible afirmar lo mismo respecto del tercer deber[...]**”, agregando dicho basamento que “**[...] atendido que la omisión a que se refiere el artículo 195 inciso segundo de la Ley 18.290, constituye un solo deber de conducta que exige tres acciones -detener la marcha, prestar ayuda y dar cuenta a la autoridad- todas destinadas a la protección de la víctima y a colaborar con la acción persecutora del Estado, el sujeto soporta el deber normativo de conducta que exige el despliegue íntegro de las acciones antes referidas. De este modo la omisión de una de ellas hace surgir la infracción penal prevista en el precepto precitado y se tiene por configurado el ilícito previamente señalado [...]**”. (la negrilla y cursiva es del Tribunal)

Lo anterior resulta relevante pues nuestra Excelentísima Corte Suprema entendió que en un accidente en que no fue responsable el conductor, en que se detuvo y prestó la ayuda, pero por el hecho de no dar cuenta a la autoridad policial, igualmente se configura el ilícito a su respecto. En el caso de marras, ya se dijo que la prueba permitió establecer que el incumplimiento fue de las 3 conductas que componen la obligación consagrada en el artículo 176 de la Ley de Tránsito, pero inclusive aunque el acusado no sea el responsable del accidente, que él hubiere ayudado a una de las víctimas, no se detuvo ni dio cuenta a la autoridad policial; inclusive, si el acto de detención objetiva del vehículo producto del impacto se entendiera que igualmente satisface la norma, no existe duda alguna de que el acusado no dio cuenta del accidente a la autoridad policial y se fue del lugar y circuló por la ciudad, inclusive, según sus dichos, se fue a una dirección a buscar a una pasajera para que acompañe a Marisol Mendoza al hospital, pero no obstante todo ello, no dio cuenta a la autoridad policial, incumpliendo la obligación que establece el artículo 176 de la Ley de Tránsito.

En síntesis, la prueba de cargo fue suficiente para estimar que el acusado se vio involucrado en un accidente de tránsito en que dos personas resultaron lesionadas, no cumpliendo con la obligación contenida en el artículo 176 de la Ley de Tránsito y, por lo tanto, se configura el ilícito contenido en el artículo 195 inciso 2° de la referida Ley. De lo anterior, habiéndose llevado a cabo la totalidad de la

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL
ARICA

conducta prevista en el tipo penal, se concluye que, en consecuencia, el grado de desarrollo del ilícito es de **consumado**.

DUODÉCIMO: Participación del acusado. Que en cuanto a la participación en los hechos de **Miguel Juan Tupa Lovera**, se cuenta, en primer lugar, con lo que expuso Isaías Orrego Araya, quien indicó que la colisión en la intersección de Avenida Santa María con Juan Antonio Ríos participó el acusado, reconociéndolo en la sala de audiencia; por su parte, el funcionario de Carabineros Cristian Cerda Navarro también indicó que, con posterioridad al accidente, en calle Bernardo O'Higgins se fiscalizó un vehículo que era conducido por Miguel Tupa Lovera y que en el asiento del copiloto iba una mujer que estaba lesionada; en el lugar, Tupa Lovera dio una versión similar a la de Isaías Orrego Araya, salvo que indicó que el responsable de la colisión fue este último; también se cuenta con el reconocimiento del propio Miguel Tupa Lovera quien, indicando que cruzó con luz verde y que fue el vehículo de Isaías Orrego quien cruzó con luz roja, reconoce que participó en el accidente de tránsito. Asimismo, respecto a la calidad de sujeto activo de este delito, se deberá estar a las consideraciones ya efectuadas respecto de dicha cuestión y que se desarrollaron en el basamento precedente. En consecuencia, habiendo participado de manera inmediata y directa en los hechos que dan cuenta de la omisión de su obrar, se concluye que Miguel Juan Tupa Lovera, ejecutó de manera inmediata y directa el ilícito y, en consecuencia, es **autor ejecutor** del mismo en los términos del artículo 15 N° 1 del Código Penal.

DECIMOTERCERO: Solicitudes en audiencia del artículo 343 del C.P.P.: Que, con posterioridad a pronunciar el veredicto condenatorio respecto del acusado Castillo Zavala, el **Ministerio Público**, en síntesis, para zanjar las dudas respecto de la identidad del acusado, las cuales se plantearon previo a dar por iniciado el juicio, incorporó un informe pericial huellográfico y dactiloscópico del LACRIM (Laboratorio de Criminalística Regional Arica y Parinacota), N° 76 confeccionado con fecha 25 de junio de 2021 en que se toman huellas a Miguel Juan Tupa Lovera, quien señalaba tener la cédula de identidad N° 9.323.601-7, nacido en el Valle de Azapa, el 26 de diciembre de 1963 y se cotejan con las posibles identidades que podría tener y se concluye que las impresiones digitales obtenidas en el Tribunal Oral en lo Penal de Arica, corresponden a la persona que manifestó llamarse Miguel Juan Tupa Lovera, RUN. 9.323.601-7 y se estableció que corresponden exactamente a Juan Vera Gregorio, cédula de identidad 14.625.307-5; asimismo, también corresponden exactamente a don Miguel Juan Tupa Lovera, RUN. 22.676.178-0 y RUN. 9.323.601-7 y se indica que se está a la respuesta de Interpol puesto que podría tener otra identidad boliviana. Indica que, en Chile,

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL
ARICA

presenta las tres cédulas de identidad, lo que es relevante para establecer la conducta pretérita y la forma de cumplimiento.

Por su parte **la defensa**, indicó, que como no se han esgrimido modificatorias por parte del Ministerio Público, solicita el reconocimiento de la atenuante del artículo 11 N° 9, la que estima que es muy calificada, en atención a que su defendido renunció a su derecho a guardar silencio y explica la dinámica del hecho, entregando elementos que eran desconocidos para el Ministerio Público como para el Tribunal, en relación a como él toma a una pasajera en su labor de chofer; además indica el trayecto después de tomarla como pasajera y reconoce el accidente y el lugar en que se cometió y no hay ningún elemento objetivo que se hubiere incorporado en el juicio de cómo sucedió la dinámica y estima que todos esos elementos probatorios, relativos a la dinámica de los sucesos, han sido aportados por su defendido quien encuentra mayor correlato con la prueba rendida que la propia declaración de la supuesta víctima puesto que da cuenta de la situación del choque, cómo quedó detenido por algún momento, el sangramiento de la víctima, cómo inicia la marcha para llevarla prestándole ayuda hacia el Hospital, el desvío que toman, por qué hacen aquello y luego cómo son controlados, señalando el estado en que se encontraba la víctima y ello se encuentra relacionado con lo indicado por don Cristian Cerda y es por ello que cree que la colaboración de su defendido tiene el carácter de muy calificada y, en contraposición a la declaración de la supuesta víctima, quien presenta falencias en su relato y contradicciones con la propia prueba del Ministerio Público, cree que la versión del Sr. Tupa Lovera debe considerarse a lo que se suma su condición de Aimara, en que ambos apellidos son de dicho origen y habla esa lengua y, por lo tanto, cumpliría con los requisitos legales para ser considerado una persona de un pueblo originario y se le hace aplicable el convenio 169 de la O.I.T. lo que influye al momento de dictar sentencia respecto de cualquier pena distinta al encarcelamiento, teniendo, además, en consideración las características sociales, culturales y económicas del Pueblo Aimara y, en este caso, la libertad es un elemento fundamental, así como la reciprocidad y la responsabilidad que se vio comprobado durante la etapa posterior al accidente y del delito donde don Miguel presta su ayuda para tratar de disminuir el mal causado como es el choque, los daños y la falta de recursos que provinieren de ellos, tanto en el propio señor Isaías Orrego como en su contratante; por todo lo anterior, cree que debe rebajarse la pena en al menos 1 grado y, por menor extensión del mal causado, ya que reparó todos los daños y la víctima quiso desistirse, como lo indicó el Sr. Jorge Eyzaguirre quien le tomó declaración a la víctima quien le indicó que todos los daños habrían sido resarcidos., solicitando que se imponga la pena en el presidio menor en su

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL
ARICA

grado mínimo y en ese contexto, se le impongan 61 días de presidio menor en su grado mínimo y que se le sustituya dicha pena privativa por la de prestación de servicios en beneficio de la comunidad, teniendo en consideración la actitud de su representado con posterioridad al choque, que ya refirió y reitera y, por ello cree que los 61 es una pena pertinente y es proporcional; funda la prestación de servicios en la calidad de Aimara de su defendido y ello en relación a las normas citadas del convenio 169 de la O.I.T., sin perjuicio que pueda ser una pena superior, pero solicita que se imponga hasta 300 días con la misma pena sustitutiva; asimismo señala que su defendido es un padre de familia, tiene una hija que es titulada, que es médico y él es quien ha colaborado con la educación de su propia hija para efectos de poder ser un aporte su familia a la sociedad. Respecto de la cancelación de licencia, no hace alegaciones y, en cuanto a la multa, solicita que se rebaje más allá del mínimo legal, considerando que existe al menos una atenuante muy calificada y sin ninguna agravante y pide se rebaje más allá del mínimo legal y se imponga como máximo 1 U.T.M. y sin perjuicio que el Tribunal pueda imponer una multa superior, la que solicita se pueda pagar en cuotas. En cuanto a las costas, pide su exención, por las mismas razones respecto del pago de la multa y considerando que su defendido es representado por la Defensoría Penal Pública. Se le consultó al acusado si estaba de acuerdo con la prestación de servicios en beneficio de la comunidad e indicó que sí lo estaba.

El Ministerio Público, incorporó la hoja de vida del conductor del acusado con el RUT 9.323.601-7, en que tiene licencia A2 otorgada el año 2008. Además, incorpora el extracto de filiación y antecedentes a nombre de Juan Vera Gregorio, cédula de identidad 14.625.307-5, quien presenta una condena en la causa 33.521/1995 del 3er. Juzgado del Crimen de Arica por el delito de tráfico de estupefacientes, en que se le condenó a 10 años por dicho delito y, bajo ese nombre y cédula, es el único delito que registra. Luego, bajo el nombre de Miguel Juan Tupa Lovera, cédula de identidad número 9.323.601-7, también es una cédula de identidad, en que se indica que es extranjero, en que registra la causa 273/2009 del Tribunal Oral en lo Penal de Arica, en que se le condenó el 4 de junio de 2010 como autor de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes a 7 años de presidio mayor en su grado mínimo; pena que cumplió el 19 de febrero de 2016; conforme a lo anterior, se mantiene en la petición de 3 años de presidio menor en su grado medio, accesorias legales del artículo 30, cancelación o inhabilitación perpetua para conducir vehículos motorizados y una multa de 10 Unidades Tributarias Mensuales; en cuanto a la forma de cumplimiento, pide que sea efectivo y si es que se reconoce la atenuante del artículo 11 N° 9, se opone a que sea reconocida como muy calificada y, en caso de accederse a esta atenuante de responsabilidad, pide se

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL
ARICA

imponga la pena de 541 días que es el trámite inferior de la pena y entiende que no se reúnen los requisitos para estimar que se pueda calificar la colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos, atendida la conducta del imputado y lo narrado en juicio en el caso en particular; no hay inconvenientes en que se concedan cuotas para el pago de la multa y no entiende que se hubieren entregado antecedentes suficientes para rebajarla más allá del mínimo;

DECIMOCUARTO: Circunstancias modificatorias de responsabilidad penal. Que con relación a las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, debe indicarse que favorece al acusado la circunstancia atenuante de colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos contenida en el artículo 11 Nº 9 del Código Penal pues, desde un comienzo, reconoció ser parte en el accidente ocurrido el 7 de febrero de 2018 en la intersección de calles Juan Antonio Ríos con Avenida Santa María; ello contribuyó de manera relevante al esclarecimiento de los hechos pues brindó corroboración a la prueba del Ministerio Público que contó con la declaración de un testigo presencial, concretamente los dichos de Isaías Orrego y si bien, por otra parte, hubo evidencia fotográfica y los testimonios de funcionarios de Carabineros, dicha prueba es más bien de carácter indiciario pues da cuenta de eventos inmediatamente posteriores al accidente, esto es, en el caso de las imágenes, los daños provocados en ambos vehículos y, respecto de aquellos observados en el automóvil conducido por el acusado, ello no se pudo fijar en el sitio del suceso precisamente porque el acusado se fue del lugar, sin embargo, al haber reconocido que era él quien conducía el vehículo en el momento de la colisión, viene en refrendar tanto el testimonio del otro conductor participante en el accidente como la prueba indiciaria presentada por el Ministerio Público y por ello se considera que su aporte ha sido sustantivo, no obstante que sin el mismo igualmente se hubiere producido condena, sin embargo, no puede negarse que el reconocimiento realizado mejoró la posición del acusador y es por ello que al referido aporte se le cataloga como sustancial.

En lo que se refiere a la petición de la defensa de considerar esta circunstancia como muy calificada y dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 68 bis del Código Penal, se rechaza dicha solicitud puesto que, tal como ya se anticipó, en el escenario hipotético de que hubiere guardado silencio el acusado o inclusive hubiere negado los hechos, el testimonio de Isaías Orrego, sumado a la prueba de cargo que es de naturaleza indiciaria, hubieran permitido arribar a una decisión de condena; en este sentido, se reitera que si bien los dichos del acusado mejoraron la posición del Ministerio Público y corroboraron la prueba de cargo y por eso se reconoció la atenuante en cuestión, tales asertos, dado el contexto de la demás prueba rendida, no alcanzan el nivel superior que se requeriría para considerar

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL
ARICA

como muy calificada la atenuante. Además, la condición de Aimara del acusado nada tiene que ver con la calificación de la atenuante y debe indicarse, además, que la pertenencia a dicho pueblo tampoco fue algo fundado en algún antecedente diverso que los propios dichos del abogado defensor.

Con relación a circunstancias agravantes y sin perjuicio de los extractos de filiación y antecedentes incorporados por el Ministerio Público y que se referirán más adelante, no se invocó por el persecutor penal ninguna circunstancia que agrave la responsabilidad de Miguel Tupa Lovera.

Por todo lo anterior y, en síntesis, respecto del acusado, únicamente concurre una circunstancia atenuante de responsabilidad penal, a saber, la colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos establecida en el artículo 11 N° 9 del Código Penal.

DECIMOQUINTO: Determinación de la pena. Que, respecto del delito consumado de no detener la marcha, prestar la ayuda posible ni dar cuenta a la autoridad de accidente de tránsito en que se produzcan lesiones, el artículo 195 inciso segundo de la Ley de Tránsito, prescribe una pena de presidio menor en su grado medio (541 días a 3 años de privación de libertad), inhabilidad perpetua para conducir vehículos de tracción mecánica y multa de siete a diez unidades tributarias mensuales. Así, respecto de la pena privativa de libertad, concurriendo una circunstancia modificatoria de responsabilidad penal y según lo prescrito en el artículo 67 inciso segundo del Código Penal, concurriendo una circunstancia atenuante y ninguna agravante, la pena se debe aplicar en su mínimo; por su parte, no dando el cuenta el Ministerio Público de una extensión del mal causado que amerite imponer la privación de libertad en una magnitud superior al mínimo legal, será aquel el que se aplicará en la parte resolutive de la presente sentencia; por otra parte, con relación a la inhabilidad perpetua para conducir vehículos de tracción mecánica, al no admitir graduación, se aplicará en la perpetuidad definida por el legislador. Finalmente, en lo que se refiere a la multa, concurriendo únicamente una circunstancia atenuante y no habiendo justificado la defensa ningún tipo de antecedentes socioeconómicos, es que no resulta posible a estos jueces determinar que la situación del acusado represente un caso calificado como lo exige el inciso primero del artículo 70 del Código Penal para imponer la multa en un monto inferior al señalado por la Ley. Debe indicarse que todas las argumentaciones de la defensa en orden a calificar a su defendido como de origen Aimara o cualquier otro antecedente socio económico de relevancia, se basó únicamente en los dichos del propio abogado defensor y no en un informe que permita otorgar mayor seriedad a las conclusiones sobre la situación particular de Miguel Tupa Lovera; máxime, desde que existe duda inclusive de la cantidad de

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL
ARICA

identidades que tiene dicha persona, que registra 2 nombres en Chile y 3 números de cédula de identidad y se está a la espera de la respuesta de Interpol para poder descartar otra identidad boliviana. Sin perjuicio de lo anterior, la concurrencia de una circunstancia atenuante, sumado a que, como se indicará, la pena que se aplicará será de cumplimiento efectivo, se estiman como circunstancias que, al tenor de lo indicado en el inciso segundo del citado artículo 70 del Código Penal, sí autorizan a estos jueces a conceder mensualidades para el pago de la multa, fijando el máximo de parcialidades que permite dicha disposición.

DECIMOSEXTO: Forma de cumplimiento. Que respecto de la forma de cumplimiento, la defensa solicitó que se concediera a Miguel Tupa Lovera la pena sustitutiva de prestación de servicios en beneficio de la comunidad, la que en la especie no resulta procedente puesto que si bien se cuenta con uno de los requisitos, esto es, concurre la voluntad del acusado, tal como lo consignó en la audiencia de determinación de pena, no se cumple ni con la extensión que requiere dicha pena sustitutiva, puesto que se requiere que la misma sea igual o inferior a 300 días, lo que en el presente caso no concurre puesto que el rango a imponer es el presidio menor en su grado medio que comienza en 541 días y, asimismo y según se anticipó, la defensa no incorporó ni siquiera un antecedente laboral, educacional o de otra naturaleza similar que justifique la pena ni tampoco incorporó, fuera de los dichos del propio defensor, elementos de convicción relativos a los antecedentes personales del condenado, su conducta anterior y posterior al hecho punible o algún otro, que permita presumir que la pena sustitutiva solicitada lo disuadirá de cometer nuevos ilícitos. De manera que no resulta posible acceder a la pena sustitutiva requerida.

Sin perjuicio de lo anterior y con relación a alguna otra pena sustitutiva que pudiese concurrir, ello se descarta puesto que teniendo presente el antecedente presentado por el Ministerio Público, consistente en Informe Pericial Huellográfico y Dactiloscópico evacuado por el Laboratorio de Criminalística Regional de Arica y Parinacota de la Policía de Investigaciones de Chile, en que se tomaron impresiones dactilares, el día 25 de junio de 2021 y en dependencias de este Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Arica a una persona que dijo llamarse Miguel Juan Tupa Lovera, RUN N° 9.323.601-7, nacido en el Valle de Azapa el día 26 de diciembre de “.963” se concluyó que dicha persona presentaba las siguientes identidades:

Juan Vera Gregorio, RUN 14.625.307-5

Miguel Juan Tupa Lovera, RUN 22.676.178-0 y RUN N° 9.323.601-7

Se esperaba, a la fecha del informe, la respuesta de “OCN Interpol”, para descartar una eventual identidad boliviana.

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL
ARICA

Sobre este respecto, previo a iniciar el Juicio, la defensa refirió que le constaba que a la persona que se le tomaron las impresiones digitales era la misma persona que se presentó el día del juicio, su defendido, Miguel Tupa Lovera.

Aclarado lo anterior y que el acusado presenta las otras identidades referidas, resulta pertinente indicar que el Ministerio Público incorporó dos extractos de filiación y antecedentes penales; uno, relativo a Juan Vera Gregorio (una de las identidades del acusado), en que registra una condena del año 1995 por tráfico ilegal de estupefacientes, cocaína, en causa ROL 33.521/1995 del "3 DEL CRIMEN DE ARICA" (SIC), en que con fecha 29 de mayo de 1995 se le condenó a 10 años de presidio mayor en su grado mínimo y multa de 40 Unidades Tributarias Mensuales. También se incorporó el extracto de filiación y antecedentes de Miguel Juan Tupa Lovera, R.U.N. 9.323.601-7, (otro de los RUT que registra este nombre del acusado), nacido el 26 de diciembre de 1963, en que se indica que este Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Arica, en causa RIT 273/2009 y con fecha 4 de junio de 2010, lo condenó a una pena de 7 años de presidio mayor en su grado mínimo y multa de 40 Unidades Tributarias Mensuales por su responsabilidad como autor de un delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, contemplado en el artículo 3 en relación al artículo 1, ambos de la Ley N° 20.000; de lo anterior, es que el acusado no reúne los requisitos para concederle una pena sustitutiva y, por lo tanto, la sanción privativa de libertad que se indicará en lo resolutivo de la presente sentencia será de cumplimiento efectivo.

DECIMOSÉPTIMO: Costas. Que no habiéndose incorporado antecedente alguno relativo a la capacidad económica del acusado y no siendo aplicable en la especie lo dispuesto en el artículo 600 del Código Orgánico de Tribunales, pues a diferencia de los consultorios de la Corporación de Asistencia Judicial en que, previo al patrocinio, se realiza una evaluación socioeconómica para determinar si procede el respaldo de dicha institución, la Defensoría Penal Pública tiene un arancel y que únicamente no cobra a quienes no tengan capacidad económica y a quienes sí tienen los medios para enterar el importe de la defensa letrada les realiza el cargo correspondiente; de lo anterior, no contando con antecedentes que permitan determinar la situación económica del acusado, no es posible acceder a la eximición del pago de las costas de la causa.

Por las consideraciones anteriores y visto además lo dispuesto en los artículos 1, 11 N°9, 14 N° 1, 15 N° 1, 18, 24, 30, 49, 50, 67, 69 y 70 del Código Penal; 1, 45, 47, 52, 295, 296, 297, 325 y siguientes, 340, 341, 342 y 348 del Código Procesal Penal y 176 y 195 de la Ley de Tránsito N° 18.290, **SE DECLARA:**

I.- Que, **SE CONDENA, con costas,** a **MIGUEL JUAN TUPA LOVERA,** cédula nacional de identidad número 22.676.178-0, previamente individualizado, a

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL
ARICA

la pena de **541 (QUINIENTOS CUARENTA Y UN) DÍAS**, de **presidio menor en su grado medio**, a la multa de **7 (SIETE) Unidades Tributarias Mensuales**, así como a la inhabilidad perpetua para conducir vehículos de tracción mecánica, a la suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, por su responsabilidad como **autor ejecutor** de un **delito consumado** de no detener la marcha, ni prestar la ayuda posible ni dar cuenta a la autoridad de un accidente de tránsito en que se produzcan lesiones, previsto y sancionado en el artículo 195 inciso 2° en relación al artículo 176, ambos de la Ley de Tránsito N°18.290, ocurrido en la ciudad de Arica el día 7 de febrero de 2018.

II.- Que la pena corporal indicada en el numeral precedente deberá **cumplirse** de manera **efectiva** dejando constancia que, respecto de eventuales abonos a considerar, el Auto de Apertura de Juicio Oral no indica que le beneficie alguno; lo anterior, sin perjuicio de lo que el Juzgado del control de la ejecución de la presente sentencia pueda resolver con mayores y mejores antecedentes. El sentenciado comenzará el cumplimiento de su pena dentro del quinto día contado desde que la presente sentencia se encuentre firme o ejecutoriada o desde que sea habido, según corresponda.

III.- Que la multa indicada en el numeral **I.-** de esta parte resolutive, deberá ser pagada en 12 cuotas iguales y sucesivas, dentro de los 5 primeros días de cada mes, comenzando en el mes siguiente al que el presente fallo se encuentre firme y ejecutoriado. El no pago de una sola de las parcialidades, hará exigible el total de la multa adeudada. Si el sentenciado no tuviere bienes para satisfacer la multa impuesta, sufrirá por vía de sustitución y apremio, la pena de reclusión a razón de 1 día por cada 1/3 de Unidad Tributaria Mensual, sin que dicha privación de libertad pueda exceder nunca de 6 meses. Sin perjuicio de lo anterior, con acuerdo del sentenciado, se podrá imponer la pena de prestación de servicios en beneficio de la comunidad en sustitución del apremio indicado precedentemente.

Ejecutoriada que sea la presente sentencia, se deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 468 del Código Procesal Penal.

Con la prevención de la Jueza doña **Fabiola Andrea Collao Contreras** quien estuvo por eximir del pago de las costas del presente juicio al sentenciado, ello en atención a que su representación por parte de la Defensoría Penal Pública permite presumir su bajo caudal económico, siendo aplicable a este respecto, lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 600 del Código Orgánico de Tribunales que prescribe, en lo pertinente, que las personas patrocinadas por las Corporaciones de Asistencia Judicial o alguna de las entidades públicas o privadas destinadas a prestar asistencia jurídica y judicial gratuita, cuentan con privilegio de pobreza y no serán condenadas al pago de costas.

**PODER JUDICIAL
TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL
ARICA**

No habiéndose incorporado materialmente al juicio documento alguno, no existe devolución que ordenar.

Regístrese, comuníquese en su oportunidad al Juzgado de Garantía de esta ciudad para su cumplimiento. Hecho, archívese.

Redactada por el Juez Titular don Mario Andrés Reyes Trommer y la prevención por su autora.

RIT: 59-2019

RUC: 1800132816-2.

SENTENCIA PRONUNCIADA POR LOS JUECES DEL TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL DE ARICA, DOÑA FABIOLA ANDREA COLLAO CONTRERAS, DON MARIO ANDRÉS REYES TROMMER Y DON CARLOS GABRIEL ROJAS STAUB.